

DE CAMPESINOS A OBREROS: LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL DE SABIÑÁNIGO

JORGE LALIENA LÓPEZ

Los pequeños procesos circunscritos a espacios reducidos pueden convertirse en campos de análisis excepcionales en los que observar con todo lujo de detalles los comportamientos de diferentes sujetos históricos. Un caso que se precia a ello es la implantación industrial que tuvo lugar en la localidad pirenaica de Sabiñánigo a partir de 1918, pues permite analizar las consecuencias sociales de la industrialización de una zona rural de montaña. Así pues, en este estudio se analiza la quiebra acelerada de los modos de vida campesinos en el entorno circundante a ese foco industrial y, especialmente, en el cambio de comportamientos políticos que dicha transformación «de campesinos a obreros» acarreó en pocos años.

PROPIETARIOS MUY POBRES¹

A comienzos del siglo XX, tanto el entorno de Sabiñánigo como la práctica totalidad del área pirenaica estaban marcados por el predominio de la pequeña propiedad de la tierra. Concretamente, en el Partido Judicial de Jaca, solo un 14,9 % de la tierra estaba en manos grandes propietarios, algo también condicionado por la imposibilidad de habilitar grandes extensiones de cultivo.² En este territorio, fue durante los años centrales del siglo XIX cuando se afirmó la pequeña e ínfima propiedad de la tierra como forma de vida mayoritaria, lo que en buena medida se

¹ Juan José Castillo, *Proprietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino en España*, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Madrid, 1979.

² Carmen Frías y Pedro Rújula, «Propiedad de la tierra y relaciones sociales en el campo. Huesca durante la segunda mitad del XX», en Carmen Frías (coord.), *Tierra y campesinado. Huesca, siglos XI-XX*, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1996. Respecto a la clasificación de los propietarios en función de su contribución he seguido el siguiente baremo: ínfimos propietarios, menos de 20 pesetas; pequeños propietarios, entre 20 y 50 pesetas; medianos propietarios, entre 50 y 200 pesetas; grandes propietarios, más de 200 pesetas de contribución anual. Hay que destacar que estos índices pueden resultar engañosos, ya que muchos ínfimos propietarios eran hortelanos con otras dedicaciones que solo poseían una parcela de huerta y contribuían mínimamente por rústica.

debe a las subastas de tierra desamortizada por medio de pequeñas parcelas, a las que acudían los campesinos en función de sus posibilidades.³

Así pues, se fue consolidando en toda la zona pirenaica una estructura de la propiedad agraria en la que predominaban pequeños e ínfimos propietarios, siendo escasos los jornaleros a tiempo total, aunque no pocos pequeños propietarios combinaban el trabajo de su propia tierra con el trabajo asalariado en aquella de los hacendados más pudientes. La situación se mantendría estable mientras la agricultura continuara siendo la actividad económica mayoritaria.

Evidentemente, todo esto debe insertarse en el proceso de desarrollo del capitalismo hacia la formación del mercado y la internacionalización de la economía, lo cual cambiaría tanto los modos de producción como la estructura de la propiedad. Estos eran los objetivos fundamentales de las leyes desamortizadoras y de la legislación liberal en general. De este modo, se fue configurando una estructura social de labradores y campesinos propietarios que habían conseguido transformar su dominio útil en dominio directo, completando el proceso de transición del feudalismo al capitalismo.

Otro producto de estas reformas, que para muchos campesinos fue un gran problema desde mediados del siglo XIX, y que adquirió una importante dimensión política durante la Segunda República, fue el intento de recuperación de los bienes comunales que habían sido expropiados y puestos en venta a partir de 1859. Como afirma Alberto Sabio, «las tierras comunales aseguraban un beneficio mínimo, que no igualitario, a todos los vecinos de la comunidad rural; en concreto, para jornaleros y campesinos pobres eran un bien insustituible que a través de distintas prácticas garantizaban la subsistencia. En este sentido, no podemos olvidarnos del proceso de privatización e individualización del uso de los montes y sus repercusiones sobre las distintas economías domésticas».⁴ De hecho, los intentos de recuperación de los bienes comunales fueron una constante desde 1860, ya que la imposibilidad de realizar prácticas como la caza, o la tala de árboles para leña, en muchos casos hacía peligrar la propia supervivencia de los campesinos, lo que acabó derivando en diferentes tipos de delitos como el uso ilegal de los bosques.⁵ Todo esto cambiaría en la Segunda República cuando los programas agrarios socialistas y anarquistas asumieran dichas reivindicaciones, recabando con ello no pocos apoyos desde el mundo campesino, especialmente donde el reparto de la riqueza era más desigual.

³ Vicente Pinilla González, *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1995.

⁴ Alberto Sabio Alcutén, *Los montes públicos en Huesca (1859-1930). El bosque no se improvisa*, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1997, p. 24.

⁵ Sobre diferentes delitos de este tipo puede consultarse: Alberto Sabio Alcutén, «Protestas, delitos forestales e incendios en los montes del Pirineo Aragonés», en *Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol*, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1995, pp. 713-730.

En definitiva, como apunta Pilar Maluenda, «la Segunda República abrió las puertas a las reivindicaciones de la clase trabajadora, y esta, aprovechando un régimen de libertad desconocido hasta entonces, plasmó por medio de movilizaciones e invasiones de fincas sus tradicionales peticiones en relación con la propiedad de los bienes comunales. Pero lo que no entendió es que el nuevo régimen era democrático en lo político, pero seguía siendo liberal y capitalista en lo económico y lo jurídico y, por tanto, iba a seguir persiguiendo los delitos contra la propiedad».⁶

LOS FACTORES DEL CAMBIO

El primer aspecto clave para la aceleración de la quiebra del sistema social anteriormente descrito fue la instalación en 1893 de una estación de ferrocarril a dos kilómetros de lo que entonces era el pueblo de Sabiñánigo —una pequeña aldea más entre tantas de la zona—, algo bastante casual ya que era solo una de las muchas posibilidades que se barajaron para el trayecto de la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc que finalmente se inauguraría en 1928.

La presencia de una estación de tren entre Sabiñánigo y Cartirana sería un factor decisivo para que algo más de veinte años después de que pasara el tren por primera vez, se creara la Sociedad Anónima Energías e Industrias Aragonesas (EIASA) —empresa nacional pero de capital francés nacida en Barcelona en 1918— con el fin de construir y explotar en los valles de los ríos Gállego y Ara un conjunto industrial formado por varios saltos de agua y una fábrica de productos electroquímicos. Hay que tener en cuenta que lo aparentemente lógico hubiera sido que se instalaran en Jaca, ciudad más grande y con más actividad económica, pero los bajos costes del terreno, la facilidad para el uso del agua y la disponibilidad del propio ferrocarril hicieron que el grupo Urquijo instalara en Sabiñánigo la que entonces era la mayor empresa de la provincia de Huesca.

EIASA creció con fuerza en su primera década de andadura, en la que requirió de varios aumentos de capital y de plantilla, formada por 322 empleados en 1929. El principal problema que tenía la Sociedad en estos momentos era la posesión de excedentes energéticos difíciles de colocar, para lo cual comenzó las negociaciones con un grupo francés que estudiaba la instalación en España de una fábrica de aluminio.

Aluminio Español, S.A., se creó en agosto de 1925 por un acuerdo de varias sociedades entre las que estaba Energías e Industrias Aragonesas, que suministra-

⁶ Pilar Maluenda Pons, «Propiedad de la tierra y orden social en Huesca. Una aproximación a la conflictividad rural durante el primer tercio del siglo XX», en C. Frías Corredor (coord.), *Tierra y campesinado*, p. 233.

ría energía eléctrica a bajo coste y cedería a la nueva fábrica los terrenos de Sabiñánigo que no utilizaba. La producción comenzaría en 1927, estabilizada hasta la Guerra Civil en unas 1.200 toneladas anuales, lo mismo que ocurriría con la plantilla, fijada en aproximadamente 115 empleados.

Producto de otros acuerdos con EIASA fue la llegada de otra fábrica —aunque de menores dimensiones— a la localidad. Era la Compañía Ibérica de Explosivos, creada en 1924 para dar salida a los cloratos procedentes de Aragonesas, con los que se fabricaba dinamita, que posteriormente era transformada en cartuchos que se vendían a las fábricas de armas.

La consecuencia demográfica inmediata de todo este proceso es fácil de suponer. Naturalmente se trata de la progresiva despoblación del mundo rural y el consecuente crecimiento de Sabiñánigo sobre su entorno. Sin embargo, los efectos demográficos de las fábricas coinciden en el tiempo con los producidos por la Guerra Civil, lo que dificulta la valoración de cada uno de los fenómenos de forma independiente. De cualquier modo, no cabe duda de que a comienzos de los años treinta la población inmigrante constituía el grueso de los habitantes de la localidad. Dentro de estos, la mayor parte procedía del entorno rural inmediato, sobre un 30 % del resto de la provincia, y aproximadamente un 10 % del resto de Aragón, España y otros países.

Así pues, el efecto demográfico más destacable de todo esto fue que las fábricas consiguieron evitar un éxodo rural masivo hacia otras zonas industriales de España o del extranjero, algo que parece bastante claro si comparamos esta zona con muchas otras de la provincia de Huesca que quedaron mucho más despobladas, como es el caso de la comarca del Sobrarbe. De este modo, la presencia de fábricas a pocos kilómetros de distancia de muchos pueblos fue la solución más viable para un campesinado empobrecido que en situaciones insostenibles se veía abocado a la emigración. El segundo factor clave para la evolución de esta población fue la Guerra Civil, ya que muerte y exilio supusieron un drástico bajón poblacional difícilmente superable sin un elemento como la industria capaz de retener a la población autóctona y, a su vez, atraer gente del exterior. Muestra de ello son las cifras de población de Sabiñánigo, que pasa de tener 264 habitantes en 1900 a 1.345 a comienzos de los años treinta, llegando a 1.800 en 1940, con lo que incrementó notablemente su población en la década de 1930 pese a sufrir el duro golpe de la guerra.

UN NUEVO ESPACIO

Con todo esto, se fue configurando un espacio que no era ni propiamente rural ni tampoco urbano. De hecho, muchos de los trabajadores compaginaban

el trabajo de la fábrica con las actividades agrarias, incluso un buen número de ellos continuaron habitando en sus pueblos de origen y se desplazaban a diario a las fábricas de Sabiñánigo en bicicleta o andando.

De lo que no cabe duda es de que este proceso de «proletarización del campesinado»⁷ tuvo unos claros efectos en los comportamientos políticos de dichos sujetos, algo observable tanto en la conflictividad social como en los resultados electorales. En ambos casos, el marco de análisis se circunscribe a los años de la Segunda República, pues «los derechos y libertades que ofrecía el marco político republicano plasmaron un caldo de cultivo propicio para el desarrollo del movimiento obrero, ya que algunas de las tensiones germinadas en las décadas anteriores con la industrialización, el crecimiento urbano y los conflictos de clase abrieron un abismo entre distintos mundos culturales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución».⁸ En Sabiñánigo, la existencia de un sindicalismo fuerte, con capacidad de presión sobre las empresas y el poder político, se limita precisamente a los años republicanos, pues la creación de la sociedad obrera tuvo lugar en julio de 1931 y desapareció definitivamente tras el golpe de estado de julio de 1936. Lo mismo ocurre con los comportamientos electorales, ya que las elecciones anteriores a la República no reflejan tanto tendencias políticas como relaciones clientelares y redes de dependencia.

Resulta extraño que en una localidad industrial con un gran número de personal obrero como era Sabiñánigo desde principios de los años veinte no existiera ni un atisbo de organización sindical hasta junio de 1931, dos meses después de la proclamación de la República. Una posible explicación puede ser la falta de experiencia sindical de la mayoría de los trabajadores, procedentes de pequeños núcleos rurales, ya que la creación de la primera sociedad obrera de la localidad estaría encabezada por gente que venía de fuera y tenía algo más de experiencia en este tipo de organizaciones.

Aunque el sindicato mayoritario en la provincia de Huesca era la CNT, en el Partido Judicial de Jaca tenía más arraigo la UGT, organizada de forma oficial desde 1928 con la Agrupación Socialista de Jaca, y por influencia de esta nacería el movimiento obrero de Sabiñánigo. Según José Carlos Castán⁹, los líderes de UGT de Jaca proyectarían su discurso sobre un grupo de trabajadores de EIASA, entre ellos Benito Torres Escartín¹⁰ y Gregorio Dieste. Este primer grupo, aparen-

⁷ Pierre Vilar, *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*, Crítica, Barcelona, 1980.

⁸ Julián Casanova, *República y Guerra Civil*, Crítica, Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 177.

⁹ José Carlos Castán Ara, «El movimiento obrero en Sabiñánigo», *Serrablo*, 107 (1998).

¹⁰ Según escribe Óscar Latas en *Los orígenes de Sabiñánigo*, colección «A la zena», 5, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1996, p. 136, los Torres Escartín procedían de Gurra de Gállego. El hermano mayor, Rafael, estaba preso en Santoña por haber atentado contra la vida del cardenal Soldevila en colaboración con el grupo anarquista «Los Solidarios», junto a célebres anarquistas como Durruti o Ascaso.

temente no organizado todavía, desarrollaría su actividad en la sede popular La Mascota, que más tarde sería sede del sindicato, lugar popular y de clase baja, claramente contrapuesto al Centro Instructivo de Sabiñánigo, donde solían encontrarse directivos de las fábricas, comerciantes y grandes propietarios, quienes nutrirían el personal afiliado a la Federación de Clases Medias, con sede en ese mismo local.

Sea como fuere, lo cierto es que el 6 de junio de 1931, Francisco Suelves y José Monreal comunicaron por escrito al alcalde de Sabiñánigo que se había constituido la Sociedad de Oficios Varios de Sabiñánigo en la asamblea fundacional. Dicha sociedad se adhería a la Unión General de Trabajadores, por lo que respetaría la legislación social reformista que venía del gobierno y sostendría la participación y actividad del PSOE en el gobierno de coalición. La organización fue creciendo, y en septiembre de 1931 contaba aproximadamente con 250 afiliados.

De todas maneras, el Sindicato no era uniforme en cuanto a opciones políticas, ya que aglutinaba distintas tendencias —republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas—, a juzgar por los resultados electorales de la localidad en noviembre de 1933. Una vez consolidada la organización, se crearon tres secciones sindicales: una para la fábrica de Aragonesas, otra para la de Aluminio, y otra para la pequeña industria y el comercio de la localidad. En cuanto a la acción sindical, se basó en seguridad e higiene industrial, reivindicaciones salariales y laborales —convenios colectivos con las fábricas y garantía del cumplimiento de la legislación laboral—, y la creación de pactos de exclusividad sindical en los centros de trabajo, lo que suponía afiliación sindical obligatoria para poder trabajar en ellos.

En 1932, con menos de un año de andadura, la Sociedad de Oficios Varios de Sabiñánigo estaba plenamente consolidada, tenía unos trescientos afiliados. Las confrontaciones sindicales con EIASA habían ganado peso, produciendo algunos desgastes que se saldaron con cambios en la dirección. La fábrica atravesaba una mala situación económica e insistía en la necesidad de reducir la plantilla, por lo que se formó una comisión mixta contra ello, y ante la dificultad de despedir trabajadores optó por reducir los jornales. Para tratar de evitarlo, la Sociedad de Oficios Varios no vio otra salida que convocar una huelga que comenzaría el 2 de abril de 1932. El plazo concedido por la fábrica para la reincorporación de los obreros pasó sin que 165 —de 200 que había— lo hubieran hecho, por lo que fueron despedidos. Ante esto, y como salida, la empresa echó mano de los abundantes *tiones* sin oficio que vivían en los pueblos de los alrededores. Estos

El caso puede seguirse en Carlos Forcadell, «El asesinato del cardenal Soldevila», *Tiempos de Historia*, n.º 47 (1978).

llegaban a trabajar escoltados en camiones protegidos por la Guardia Civil y, gracias a ellos, la fábrica pudo mantener la producción.

Fue entonces cuando, por primera vez, el conflicto tomó un cariz violento. El 31 de mayo de 1932 los huelguistas atentaron con cartuchos de dinamita contra las instalaciones de la fábrica y las casas de dos directivos de la fábrica, que fueron incendiadas. El gobernador civil clausuró la sede sindical y detuvo a 16 individuos, de los que 7 fueron procesados y serían absueltos tras 6 meses de prisión preventiva. Todo esto, unido a las luchas internas, acabó suponiendo la práctica desaparición del sindicalismo local. Tampoco tardaron en aparecer las acusaciones de corrupción entre los miembros de la organización, lo que se saldó con la expulsión de alguno de ellos por haberse vendido a la patronal y participar en su estrategia de crear altercados violentos para descabezar el movimiento obrero y acabar con la huelga y el sindicato, además de haber malversado fondos procedentes de la delegación general de la UGT.¹¹

La primera asamblea tras la huelga contó con solo una tercera parte de los socios que hacía seis meses, pero trató de buscarse de nuevo una solución definitiva al conflicto con EIASA. Finalmente, la empresa acabó readmitiendo a 15 de los despedidos a cambio de suspender las relaciones laborales y la recuperación del trabajo perdido.

En noviembre de 1933, la Sociedad de Oficios Varios de Sabiñánigo decidió desvincularse de la UGT y adherirse a la CNT, dado que los socialistas habían pasado a estar en minoría en la sociedad. Apenas un mes después tuvieron lugar grandes levantamientos anarquistas en toda España, con fuerza considerable en la provincia de Huesca.¹² La inexistencia del menor altercado en la localidad da constancia del momento de desorganización que atravesaba el sindicato, más todavía teniendo en cuenta que en esos momentos estaba dirigido por los sectores más afines al anarquismo.

Sin embargo, en febrero de 1934 se iban a retomar los planteamientos socialistas, ya que estos recuperaron la mayoría. También entonces se decidió dirigir la actividad sindical únicamente hacia los trabajadores de la industria, dado el poco éxito entre las pequeñas industrias y el comercio, lo que, en buena medida, muestra la diferencia de percepciones y actitudes políticas entre un obrero industrial y un pequeño comerciante. La nueva directiva estaba encabezada por gente de la fábrica de Aluminio, curiosamente, presidente y vicepresidente, procedentes

¹¹ En septiembre de 1932, Benito Torres Escartín escribía un artículo desde la cárcel de Jaca en la revista *Vida Nueva* acusando a Gregorio Dieste y Francisco Saldaña (presidente y vicepresidente del sindicato) de ser «los más taimados traidores a la causa proletaria» basándose en una carta escrita por Dieste a los directivos de la fábrica manifestando sus «buenas intenciones» con ellos.

¹² José María Azpíroz, *Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República*, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993, pp. 161-171.

de Agüero, donde antes de la República ya existía un socialismo y republicanismo muy consolidado.

Pocas son las noticias conocidas durante el bienio radical-cedista, pero lo cierto es que los cargos permanecieron en las mismas personas hasta el triunfo del Frente Popular. En 1934, la ruptura del grupo republicano que controlaba el Ayuntamiento se saldó con el ascenso a la alcaldía de Hilario Ipiens, quien sería de nuevo alcalde tras la sublevación militar junto con otros concejales que habían estado en el primer bienio y gentes del Centro Instructivo y de la Federación de Clases Medias.

En 1936, la Sociedad de Oficios Varios de Sabiñánigo estaba plenamente consolidada, lo que influiría sin duda en la inclinación mayoritaria de la localidad hacia el Frente Popular, hasta tal punto, que en marzo de dicho año, el Gobernador Civil cesó al Ayuntamiento, que pasaría a estar formado íntegramente por personas pertenecientes a la sociedad obrera y, de hecho, el presidente de la sociedad Antonio Muñoz sería quien ocupase la alcaldía hasta que el golpe de estado de julio de 1936 le destituyera y volviera a nombrar a su antecesor, Hilario Ipiens.

En definitiva, este proceso es una muestra de la capacidad de arraigo de un movimiento obrero de estas características en una localidad con una configuración social como la que en esos momentos tenía Sabiñánigo. Menos de un año tardó en consolidarse plenamente desde su creación en 1931. Tras el duro golpe que supuso la huelga y la práctica desintegración del sindicato, en algo más de tres años estaba plenamente recuperado, contaba con 260 afiliados en abril de 1936, y un mes antes había llegado a su máximo logro con la conquista del poder municipal.

Además de esto, el cambio de actitudes políticas que suponía pasar de ser campesino a obrero industrial queda claro si atendemos a los diferentes comportamientos electorales entre Sabiñánigo y su entorno rural, más todavía si tenemos en cuenta que muchos electores de la localidad industrial poco tiempo antes residían en pequeños núcleos rurales.

De cualquier modo, resulta difícil evaluar cómo eran percibidas ciertas formaciones políticas con gran protagonismo en los dos primeros comicios de la Segunda República, especialmente el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, cuya influencia estaba asentada en muchas zonas rurales antes de la llegada de la República. Como partido interclasista, el PRR derivó hacia posturas cada vez más conservadoras en materia social y económica; solo los ataques a la influencia que la iglesia ejercía en la sociedad —especialmente en el mundo rural— y las acometidas al arraigo secular del caciquismo le daban ciertos aires izquierdistas.¹³ En el espacio aquí estudiado fue con creces el partido más votado

¹³ *Ibid.*, p. 60. Sobre la figura de Lerroux puede consultarse la magnífica obra de José Álvarez Junco, *El emperador del paralelo: Lerroux y la demagogia populista*, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

en las elecciones de 1931, lo que se debe a la ausencia de una referencia política para la derecha a juzgar por los resultados electorales de 1933, cuando Acción Agraria Altoaragonesa¹⁴ consiguió superarle en votos. Entre el resto de partidos políticos hay una división más clara entre derechas e izquierdas, lo que en cierta medida permite hacernos una idea más aproximada de la orientación política de cada municipio.

Aunque el análisis en profundidad de los resultados electorales de Sabiñánigo y su entorno quede lejos del alcance de este artículo, a grandes rasgos se puede afirmar que las zonas de campesinos propietarios muestran tendencias más orientadas a la derecha, especialmente donde hay más grandes propietarios —caso del Valle de Tena— y mayores diferencias sociales, lo que también puede ser la consecuencia de una mayor presencia de relaciones clientelares. Un caso particular sería Biescas, localidad con un perfil socioprofesional de carácter artesanal¹⁵ que en los tres comicios de la República muestra una clara orientación a la izquierda.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es del predominio absoluto de la izquierda en Sabiñánigo —salvo en las elecciones de 1933 en las que hay una fuerte abstención—, confirmando la premisa de la orientación de voto que se le presupone a una localidad de predominio obrero industrial. Por otro lado, también hay que destacar que en un contexto como ese, el ejercicio del caciquismo también resultaba más complicado, pues el ambiente social había sufrido una apertura considerable y las relaciones de dependencia se habían transformado completamente. En definitiva, aunque nunca se puede hablar en términos totales sobre la orientación política del campesino hacia la derecha y el obrero a la izquierda, esa transformación «de campesinos a obreros» supuso un clarísimo cambio de percepciones políticas que se ve reflejado en los comportamientos electorales.

Por otro lado, resulta llamativo que tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936, en una localidad en la que se había desarrollado una actividad política como la aquí descrita, tras el rápido control de la misma por los militares sublevados, la represión tuviera unas dimensiones bastante reducidas, más todavía teniendo en cuenta la alta tasa represiva de la vecina localidad de Jaca subordinada al mismo mando militar.¹⁶ Para tratar de explicarlo es necesario tener en cuenta el hecho de que las fábricas podían ser bombardeadas —y de hecho lo fueron—, por lo que se militarizaron y su producción se orientó a la guerra, pues se fabricaban productos químicos destinados a los explosivos. Para ello también

¹⁴ Acción Agraria Altoaragonesa (AAA) era el nombre con el que se presentó la CEDA por la provincia de Huesca en las elecciones de 1933 y 1936.

¹⁵ Un interesante artículo sobre el radicalismo político de los zapateros y otras profesiones artesanales puede leerse en «Zapateros políticos», pp. 29-57, de Eric Hobsbawm, *Gente poco corriente. Resistencia, revolución y jazz*, Crítica, Barcelona, 1999.

¹⁶ Sobre la violencia política en el Partido Judicial de Jaca durante la Guerra Civil se puede consultar Esteban C. Gómez, *El eco de las descargas. Adiós a la esperanza republicana*, Escego, Barcelona, 2002.

era necesaria la mano de obra, y en un contexto como el de 1936 el capital humano era limitado y muchos puestos requerían cierta cualificación, por lo que se intentó que el grueso del personal obrero —a excepción de los principales líderes sindicales— permaneciera en sus puestos. De este modo, sin tener en cuenta lo hecho hasta entonces, quien se afiliara a Falange quedaría eximido de cualquier responsabilidad política, con lo que se consiguieron satisfacer las necesidades de producción de las industrias de la localidad.

CONCLUSIONES

El origen de todo este proceso ha de situarse a mediados del siglo XIX, pues fue entonces cuando, como consecuencia de los procesos desamortizadores, la mayor parte de los habitantes del área pirenaica se convirtieron en pequeños propietarios, aunque algunos ya lo eran y consolidaron su posición. Sin embargo, este modelo de «economía campesina»¹⁷ era incompatible con el asentamiento de unas estrategias productivas de mercado que permitieran la consolidación del capitalismo en el mundo rural, ya que debido al bajo nivel de renta, la mayoría de ellos no pudo invertir en medios de producción más modernos que permitieran aumentar la productividad, pues eso suponía un riesgo inmediato de quiebra de la unidad de explotación familiar.¹⁸ En este sentido, tanto el origen del modelo de «campesinos pequeño-propietarios» como su quiebra son efectos del devenir del sistema económico capitalista. En el primer caso responde a la necesidad de liberalización de la propiedad agraria para que esta pasara a ser libre y circulante, pero conforme evolucionara el mismo sistema estarían condenadas a desaparecer, puesto que su propia naturaleza les impediría adaptarse a las exigencias del mercado.

Los grandes cambios económicos provocaron el empobrecimiento de dichas comunidades, dando lugar a la salida más habitual en estos casos: la emigración. La instalación de un complejo industrial en Sabiñánigo a partir de 1918 aceleró en gran medida la quiebra de ese modelo, pues la existencia de una alternativa real a pocos kilómetros de distancia supuso una mayor facilidad a la hora de dejar el campo para pasar a habitar un nuevo núcleo industrial, de modo que se aceleró el proceso considerablemente. En todo caso, no cabe duda de que un

¹⁷ De acuerdo con lo que afirma P. Vilar en *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*, pp. 265-280, el concepto de «economía campesina» induce fácilmente a la confusión ya que no responde a un modelo económico en sí mismo. En este caso, las referencias a dicho concepto aluden al modelo explicado en las páginas anteriores de la pequeña propiedad, que Pierre Vilar considera una herencia feudal al no responder al modelo capitalista por confundir la fuerza de trabajo con la propiedad de los medios de producción (p. 276).

¹⁸ *Ibid.*, pp. 280-282.

claro efecto de ello fue, y continúa siendo, la permanencia de la población en la zona que actualmente se conoce como Alto Gállego, que en 1930 tenía prácticamente el mismo número de habitantes que hoy en día aunque, evidentemente, distribuidos de forma muy diferente.

El cambio de percepciones políticas que supondría pasar de ser campesino semiautosuficiente a obrero asalariado queda claro si atendemos tanto a los resultados electorales como a la conflictividad social, en ambos casos procesos circunscritos al contexto de mayores derechos y libertades que ofreció la Segunda República desde 1931. Y es allí donde se puede observar desde la perspectiva local un ejemplo del desafío al orden social durante el periodo republicano que acabó en 1936 con el golpe de defensa de las clases poseedoras.